

POBREZA, EQUIDAD Y JUSTICIA: "NO MÁS CARIDAD, QUEREMOS JUSTICIA"

Jorge Bernal Medina
Director General, Corporación Región



Amartya Sen insiste en que la democracia es una condición y una garantía para enfrentar el hambre y la pobreza, de hecho en los países de más alto desarrollo humano y de menores niveles de pobreza y desigualdad es más sólida y extendida la democracia. No basta con crecer; con reducir los elevados niveles de pobreza y con ampliar servicios sociales, hay que avanzar en la construcción de sociedades con ciudadanos e instituciones realmente democráticas.

"No más caridad, queremos justicia". Esta consigna que se agitó en los conciertos realizados el 1 de julio en las principales capitales del mundo en el marco de la primera jornada del Llamado Global Contra la Pobreza recoge bastante bien la postura ética y política que debe ser asumida a la hora de hablar del combate a la pobreza y la lucha por la equidad. El asunto de la pobreza y de la equidad no es sólo un propósito económico, sino también un imperativo ético, moral y político de los gobiernos, de los grandes grupos económicos y en general de los sectores que detentan el poder económico y político.

Cuando el tema de la pobreza se pone sobre el tapete surgen múltiples preguntas. Estas van desde qué entendemos por ella (no es sólo un problema de ingresos), de cómo medirla (qué índices y tasas utilizar), cuál es su magnitud e intensidad, a quiénes está afectando más, cuál es su relación con el crecimiento económico y con la política; hasta si las políticas que se están aplicando para su reducción están produciendo los resultados más adecuados (focalización, subsidios), etc.

Lo que es menos común en la mayoría de los estudios y análisis es hablar

de las causas y de los responsables de su incremento y de su relación con la equidad y la justicia. ¿Por qué la pobreza es mayor en unos países que en otros? ¿Por qué hay países donde baja la pobreza pero se mantienen altos niveles de desigualdad (como en Chile-China)? ¿Por qué algunos lograron reducir su pobreza, bajar la desigualdad y construir sociedades más justas y democráticas, aún dentro del capitalismo (por ejemplo, Noruega, Suecia)? ¿Por qué viene creciendo también la pobreza en los países del Norte (Estados Unidos)? Las respuestas a muchos de estos interrogantes marcan importantes diferencias en el ámbito del análisis económico y en las posturas políticas.

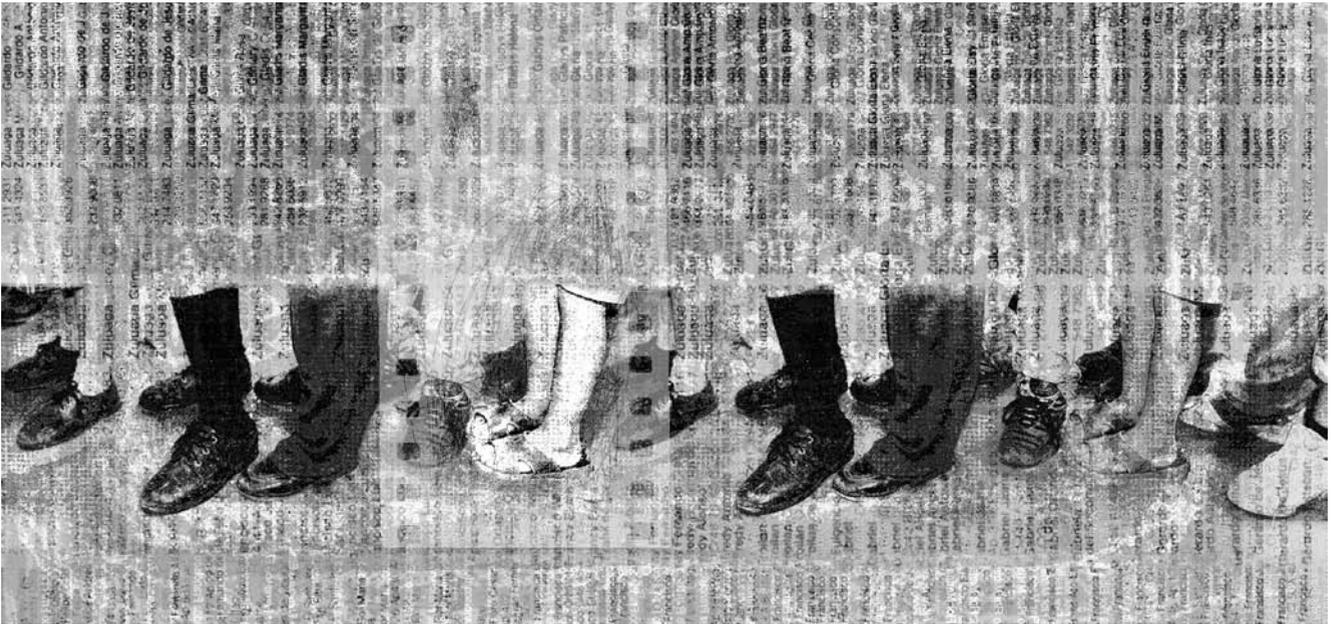
Para algunos no hay responsables concretos de estos hechos, o, si los hay, están referidos a los comportamientos de la naturaleza, a las catástrofes, a la geografía, a la cultura, o lo que es peor, para otros, la culpa es de los propios pobres por no estudiar, por no trabajar, por ser flojos y no esforzarse. Para eso se traen a cuento ejemplos de personajes que comenzaron desde muy abajo y ahora son grandes empresarios, lo cual permitiría concluir que la superación de la pobreza es sólo un asunto de mucho trabajo, de esforzarse lo suficiente y

de saber ahorrar (de no gastarse la plata en licor).

Por supuesto, no compartimos este tipo de diagnósticos y por ello nos proponemos avanzar en algunas de las explicaciones sobre las causas y los responsables de que la pobreza y la desigualdad no sólo se mantengan, sino que aumente en muchos lugares del mundo.

El problema: Aumento de la pobreza y de la desigualdad

Unas cuantas cifras permiten establecer con suficiente contundencia quiénes se siguen beneficiando con la actual dinámica económica, social y política en el mundo y en Colombia. Según datos recientes de las Naciones Unidas (2000) "2.800 millones (45%) de personas en el mundo vive con menos de dos dólares diarios y 1.200 millones (20%) con menos de un dólar al día". En contraste "los activos de las 358 personas más ricas del planeta equivalen al ingreso de 2.300 millones de personas de bajos ingresos en el mundo, mientras que los activos de los tres principales multimillonarios eran superiores al PIB de todos los países menos adelantados y sus 600 millones de habitantes". Así mismo, que "el 20% de



la población mundial que vivía en los países más desarrollados, tenía el 86% del PIB mundial; en tanto, que el 20% inferior sólo tenía el 1% del PIB mundial” (Naciones Unidas, 2000).

La desigualdad y la pobreza también se incrementan en los países desarrollados. Según Bauman (2000) en los Estados Unidos en los últimos veinte años, los ingresos totales del 20% de las familias estadounidenses más pobres se redujeron en un 21%, mientras que los ingresos totales del 20% más rico de la población aumentaron en un 22%. De acuerdo con el último informe de las Naciones Unidas, sobre la situación social mundial, las diferencias más pronunciadas entre los salarios se producen en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá (Naciones Unidas, 2005).

Para el caso de África se ha establecido que más del 50% de los africanos padece enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua que consume, lo que produce cólera y diarrea infantil; así mismo, que cada

30 segundos un niño africano muere a causa del paludismo y otras enfermedades prevenibles; esto sumado a la gran proliferación del VIH-Sida ha colocado la expectativa de vida en muchos países africanos en menos de 40 años. Sobre los efectos del hambre en el mundo, Naciones Unidas registra que cada 3,6 segundos una persona muere de hambre, siendo la mayoría de ellos niños (Naciones Unidas, 2005:83).

Hablando de América Latina, la Cepal (2004) presenta cifras igualmente dramáticas de la crisis social de la región; según este organismo, la pobreza afecta a 226 millones de latinoamericanos, de los cuales 40 millones de personas pasaron a ser indigentes en los últimos años y cerca de 40 millones de niños viven o trabajan en las calles, entre tanto, la desigualdad se mantiene o se incrementa en algunos países.

Colombia registra una de las tasas de pobreza más altas del continente (24 millones de pobres) y sigue ostentando uno de los primeros lugares en el

mundo en términos de desigualdad social. Según los cálculos del Centro de Investigación para el Desarrollo —CID— de la Universidad Nacional, el coeficiente de Gini¹ se situó en 0,563 y la diferencia en los ingresos del decil 10 de la población (la de mayores ingresos) es de 40 veces más que la del decil uno (los ingresos más bajos) (Centro de Investigación para el Desarrollo –CID–, 2004).

Respecto a la concentración de la propiedad Julio Silva Colmenares (Uribe, 2005) encontró que los diez principales grupos financieros colombianos controlan activos que suman 33.928 millones de dólares, es decir, un 46,5% del PIB nacional. De igual manera la situación de desigualdad en el campo colombiano es aberrante, el Gini de concentración de la tierra (ajustado con base en el avalúo catastral) es de 0,81. A esto hay que añadir que el conflicto ar-

1. Medida que permite determinar la distancia en la distribución del ingreso, entre más se acerca a 1 es mayor la desigualdad, y, al contrario, mientras más se acerque a cero, la desigualdad es menor.

mado ha ocasionado que las personas desplazadas por cuenta de la apropiación extorsiva de la tierra a manos de los grupos armados abandonaran cuatro millones de hectáreas. Esto sucede mientras los terratenientes disfrutaban de un impuesto que apenas representa el 2,4 por mil del valor catastral de los predios (Uribe, 2005).

Los resultados para Antioquia y Medellín son igualmente dramáticos, según los propios estimativos de la Gobernación, el departamento contabiliza 3,2 millones de pobres, de los cuales 1,2 millones están en estado de pobreza extrema. (Gobernación de Antioquia, 2005). En contraste los índices de Gini son similares al nacional, 0,54 y la propiedad de la tierra registra excesivos niveles de concentración. Según los registros del Agustín Codazzi, el 10% de los propietarios de predios en el departamento concentra el 80% de los predios, en tanto, que el 90% de pequeños propietarios sólo cuenta con el 20%. De los 518.864 propietarios de predios, 69 poseen 63 predios de más de 2.000 hectáreas; en tanto que, 40.174 propietarios contaban con 39.106 predios entre 0 y 1 hectáreas.

Por su parte, Medellín registra 1,2 millones de personas en situación de pobreza y 300.000 en pobreza extrema (López, 2005). El índice de Gini mantiene las mismas tendencias de Colombia y Antioquia: (0,54) y la desigualdad de ingresos es suficientemente elevada; si se divide a la población por deciles, se encuentra que el decil 10 (los de mayores ingresos) recibía 40 de cada 100 pesos de ingreso, en tanto que el decil 1 (los más pobres) sólo recibían un peso con ochenta centavos, es decir, que los de mayores ingresos recibían 22

veces más que los de menores ingresos (Bernal y Álvarez, 2005:304).

Los resultados del Gini general se entienden mejor si se analiza la concentración según los diversos sectores económicos y para las grandes empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Medellín. En la década del 90, sectores como el financiero, con un Gini de 1.064, el comercio con 1.015 y el de servicios varios con 1.256, registraban un estado de concentración o de desigualdad total. Esta situación tiene una leve modificación en el año 2000, cuando los resultados fueron del 0,9980, 0,9989 y 0,9988 respectivamente. En sectores como la industria manufacturera, la construcción y la ingeniería civil, el transporte y almacenamiento y la hotelería y turismo, el nivel es muy próximo a uno. Al comienzo y al final de la década el resultado está entre 0,98 y 0,99. Por eso el resultado para el conjunto de empresas inscritas en la Bolsa de Valores de Medellín es de 0,9873 en 1992 y de 0,9931 en el 2002 (Bolsa de Valores de Medellín, 2002).

Otro elemento que vale la pena anotar es la disminución en el número de empresas inscritas en la Bolsa; de 316 empresas inscritas en 1992, sólo aparecen 157 en el 2000, esto puede ser otra muestra de la concentración de la propiedad ocurrida en estos años. Casos como el del sector financiero y el de la manufactura llaman la atención pues de 90 empresas se redujo a 54 en el primer caso y de 116 a 47 en el segundo. En lugar de tener más empresas y más propietarios se pasa a una situación donde un grupo cada vez más pequeño controla los distintos sectores económicos de la ciudad. Esto, como lo veremos, es muy grave en la perspectiva de tener sociedades más democráticas.

Aunque Medellín registra mejoras en el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Condiciones de vida en los últimos años en razón de la reducción de muertes violentas y las mejoras en cobertura educativa, las distancias entre estratos y comunas siguen siendo grandes en este campo. A manera de ejemplo el IDH del Poblado es 18 veces más que el del Popular y en el ICV la diferencia entre estas comunas llega a 25 puntos (Alcaldía de Medellín, 2004).

Hecho este recorrido por algunos de los principales indicadores para medir la situación de pobreza por ingresos y las desigualdades económicas y sociales es aún más pertinente la formulación de preguntas referidas a las causas y responsables de esta profunda crisis social.

Causas y responsables

Es evidente que desde los años setenta se acentúan cambios de tipo estructural en el modelo de acumulación capitalista tanto en los países desarrollados, como en los países dependientes, cambios que tienen que ver con el debilitamiento de las actividades productivas y el predominio del capitalismo financiero (la financiarización de la que habla Pierre Salama, o la economía de casino y el fascismo financiero que refiere Boaventura de Sousa), de la industria de la guerra² y de la sociedad del consumo (Bauman, 2000); junto a las cuales van las transformaciones profundas en el mercado laboral, en el papel del trabajo productivo y la relación salarial y prestacional. A manera de ejemplo de la mayor relevancia de las actividades espe-

2. El sólo gasto militar de los Estados Unidos asciende a 500 mil millones de dólares por año, cifra cercana al PIB de la India (Uribe, 2005).

culativas, Attac señala que las actividades especulativas del gran capital financiero internacional, mueven 1.600.000 millones de dólares por día hábil, lo que equivale a cerca de 380,9 trillones de dólares por año sobre el mercado de cambios³.

De manera simultánea con los cambios en los énfasis de las actividades económicas se busca la reducción en las funciones económicas del Estado y su gran debilitamiento en términos de Estado Social de derecho o Estado Bienestar. El Estado deja de garantizar la universalidad de los derechos sociales y se limita a atender los efectos

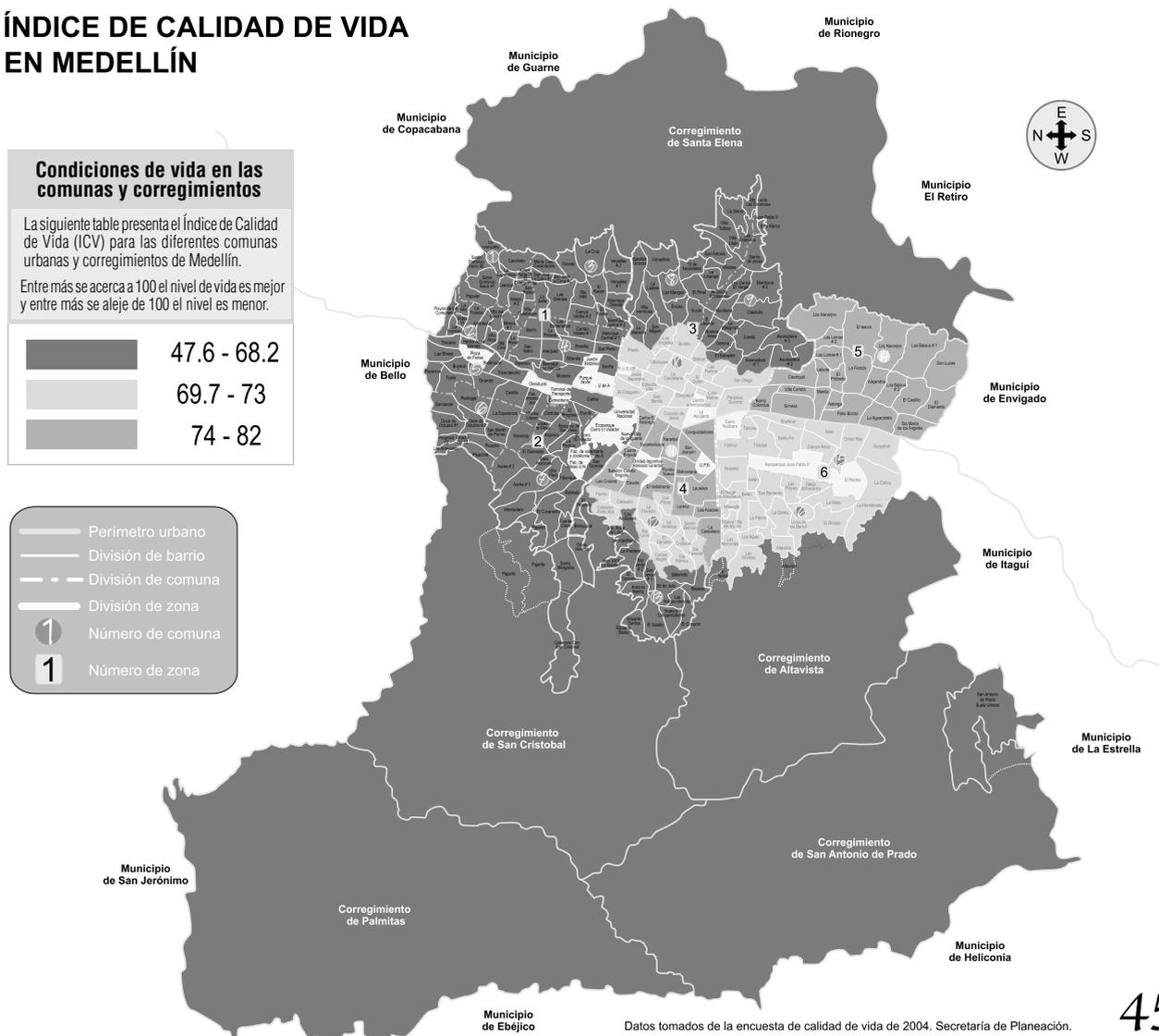
de las reformas económicas y de los ajustes estructurales con programas focalizados para los más pobres. De la mano del libertarianismo de Hayek, de Nozick y de Friedman, se insiste en que el Estado debe tener como responsabilidad central la preservación de los derechos civiles y en particular la protección de la vida y la seguridad de los miembros de una comunidad. Los derechos sociales, las acciones redistributivas a favor de los desiguales y excluidos, la planeación de actividades económicas estratégicas y, otras funciones que cumplía el Estado Bienestar, deben

ser dejadas a las dinámicas sociales y, en particular a la regulación de los mercados.

De allí que, en lugar de promover acciones de tipo redistributivo que afecten los privilegios de los grandes capitalistas y especuladores de todo tipo, lo que se sigue promoviendo por el Fondo Monetario Internacional, y por la mayoría de gobiernos en el Norte y en el Sur es el recorte de los beneficios prestacionales de los trabajadores formales, pues si

3. Comité Attac- Mosela. El Impuesto Tobin. Traducción de Susana Merino.

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN MEDELLÍN



esto no se hace, dicen ellos, no habrá suficientes atractivos y seguridades para las inversiones de las multinacionales. En palabras de Hans Tietmeyer, presidente del Banco Federal Alemán: “Lo que está en juego hoy es crear condiciones que despierten la confianza de los inversionistas; para despertar esa confianza en los inversionistas, se requiere un control más estricto del gasto público, una reducción de la carga impositiva, una reforma del sistema de protección social y dismantelar las rigideces del mercado laboral” (Bauman, 1999:136).

Es decir, que ante el aumento de la pobreza y de la desigualdad se responde con medidas aún más regresivas en términos económicos y sociales e inmorales en términos éticos. Poco importa que el 40% de la población del planeta se encuentre en situación de pobreza y que miles de niños mueran por hambre, lo que hay que proteger es la inversión privada y facilitar sus fabulosas ganancias. Cada país, cada gobierno, lo que realiza son reformas que faciliten al máximo la presencia del capital extranjero y den tranquilidad a los inversionistas nacionales, poco importa si esas inversiones generan o no valor agregado, si transfieren tecnología, si generan empleo, si saquean los recursos naturales de los países, lo que importa es que lleguen nuevos capitales, así sean los llamados “capitales golondrinas”.

Es indiscutible que el neoconservadurismo económico y filosófico y la derecha política se impusieron en buena parte del mundo occidental desde los años ochenta, desde los Estados Unidos con Ronald Reagan, la señora Thatcher en Inglaterra, hasta Augusto Pinochet en Chile. Para el caso particular de América Latina,

inspirado en estos principios, se impuso el llamado Consenso de Washington como la política económica y social que debían adelantar todos los gobiernos de la región.

Después de quince años de aplicación de este modelo los resultados son en su mayor parte lamentables, pues aunque se logró cierta estabilidad macroeconómica, se empeoró en términos de un real desarrollo económico sostenible y productivo y en el bienestar social de la mayoría de la población. Con toda la autoridad que le da el haber sido el economista principal del Banco Mundial y premio Nóbel de economía Joseph Stiglitz, realiza un balance absolutamente crítico de estas políticas económicas y sociales y propone en su lugar profundas reformas en estos campos (Stiglitz, 2003).

Según este autor las políticas del Consenso de Washington prestaron escasa atención a las cuestiones relativas a la distribución y a la equidad, su gran preocupación se centró en el combate a la inflación y a otros componentes de la macroeconomía. En su opinión en el marco de las llamadas reformas orientadas al mercado, mucha gente del mundo en desarrollo considera que ha sido estafada, pues aunque se le mantengan sus derechos civiles y puedan seguir votando, se les ha privado del derecho a ser oída en otros aspectos esenciales. Después de vender la democracia, les dicen que las decisiones fundamentales, relativas a la política macroeconómica (y especialmente la monetaria), son demasiado importantes como para dejarlas libradas a los procesos políticos democráticos. “No se pueden confiar en el pueblo le dicen, porque es muy probable que lo engañen los dirigentes populistas. Los bancos centrales deben ser inde-

pendientes; en la mayoría de los casos, han sido no sólo independientes, sino carentes de representatividad; sólo se han expresado allí las perspectivas y los intereses financieros” (Stiglitz, 2003:14).

Para él, el Estado debe seguir cumpliendo un papel central en la orientación del desarrollo económico y en la garantía del bienestar humano, por eso señala que: “Se debió haber reconocido que, si bien los mercados pueden hallarse en el centro de una economía sana, el Estado tiene un papel importante que desempeñar en la reducción de las desigualdades de América Latina (Stiglitz, 2003:27).

Una evidencia contundente en este sentido se encuentra al analizar la experiencia de países que no han seguido estas políticas y han desarrollado estrategias económicas más heterodoxas y más ligadas a sus propias realidades, con ello han tenido mejores resultados tanto en sus tasas de crecimiento, como en la reducción de los índices de pobreza. Los ejemplos de China y de la India, de Corea del Sur, Singapur y Malasia entre otros, son contundentes en cuanto a lograr tasas de crecimiento de sus economías muy altas y, al mismo tiempo, lograr reducciones significativas en los niveles de pobreza⁴.

Al referirse al éxito chino, el Banco Mundial advierte que entre 1990 y 2015 ese país habrá disminuido en 304 millones el número de personas que viven con menos de un dólar diario, y en 611 millones el número de personas que viven con menos de dos dólares diarios. En el mundo no asiático estas cifras en cambio aumentarán en 180 y 228 millones

4. Joseph Stiglitz, hace un excelente balance de estas políticas en su libro: *El malestar en la globalización* (2002).

de personas respectivamente (Uribe, 2005). De hecho las posibilidades de cumplir los objetivos del milenio a nivel mundial, en lo que tiene que ver con la pobreza y el hambre, están centradas en los logros de China y de la India, que han estado bastante lejos de la ortodoxia neoliberal.

Estas realidades ponen sobre el tapete una discusión absolutamente relevante a nivel mundial y para nuestro país. Esta discusión tiene que ver con el papel y las características del crecimiento económico. Hasta hace muy poco la tesis que prevalecía entre los economistas más ortodoxos, tenía que ver con que el crecimiento económico por sí sólo, era la condición básica y principal para lograr alguna reducción en los índices de pobreza. Por fortuna una serie de autores a nivel mundial y en Colombia han venido demostrando teórica y empíricamente que no basta con crecer y, lo más importante, que no todo crecimiento económico es pro-pobre, es decir, que promueva equidad y baje la pobreza.

Aplicando la metodología de N. Kakwani, Jorge I. González y Alfredo Sarmiento entre otros⁵ han buscado determinar la relación entre crecimiento económico, equidad y lucha contra la pobreza para el caso colombiano entre 1996 y el 2004. Veamos algunos apartes de este importante trabajo.

Autores como *Kakwani, Khandker y Son* (2004:2) han venido trabajando la *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR). La PEGR es una medida que combina la magnitud del crecimiento económico y la forma cómo sus beneficios son distribuidos entre los pobres y los no pobres. Una vez se obtiene la medida la PEGR y se le compara con la tasa de crecimen-

to del ingreso medio observado, es posible establecer una tipología del crecimiento económico dependiendo de la forma como incide en el bienestar de los pobres. La PEGR tiene una propiedad fundamental: una disminución de la pobreza es una función monotónica creciente de la PEGR. Si la PEGR crece la pobreza disminuye. Kakwani parte del principio de que el crecimiento debe favorecer a los pobres (*crecimiento pro-poor*), y para que ello sea posible, es indispensable redistribuir el ingreso y la riqueza durante el proceso de crecimiento.

El trabajo de estos autores toma el período 1996-2004 y lo subdivide en siete períodos para mostrar que tres corresponden a escenarios de crecimiento y cuatro a crecimientos negativos. La comparación entre la situación de 1996-1997 y la de 2001-2002 constata la información de que no todo crecimiento es bueno para la pobreza. Las tasas de crecimiento del bienestar en los dos períodos son similares, pero su naturaleza pro-poor está definida por las mejoras en la distribución del ingreso. En el decrecimiento 1998-1999 los pobres se lesionaron menos proporcionalmente que los no pobres, mientras en la recuperación de 2001-2002 los pobres no disfrutaron de las ganancias del crecimiento más que proporcionalmente con respecto a los no pobres. Eso no quiere decir de ninguna manera que el crecimiento 1998-1999 haya sido bueno para los pobres, sino que los pobres se afectaron con la crisis en una proporción menor a los no pobres (Sarmiento y González, 2005).

La conclusión de estos autores destaca que la experiencia reciente colombiana muestra que en la mayor parte de los años analizados el crecimiento tiende a no favorecer a

los pobres. De manera que se hace necesario un esfuerzo explícito a favor de las políticas de crecimiento que favorezcan la distribución, pues si se quiere seriamente disminuir la pobreza es indispensable que el crecimiento esté acompañado de una mejor distribución de la riqueza. Políticas orientadas a hacer más equitativo el sistema tributario (renta, predial, plusvalías urbanas, etc.), son una exigencia clara para lograr simultáneamente una mejora del crecimiento y la equidad. El componente distributivo es consustancial al planeamiento de Kakwani *et al.* No se trata entonces de una condición menor. Dada la naturaleza inequitativa de Colombia habría que modificar la concentración de la propiedad, del capital y del ingreso (Sarmiento y González, 2005:20).

Además de los factores externos referidos a las transformaciones en los procesos de acumulación del capitalismo mundial y de las políticas que los organismos financieros internacionales imponen a los países en desarrollo, es evidente que hay otras causas y responsables de esta situación de inequidad e injusticia. Existen factores que tienen que ver con la conformación histórica y económica de Colombia como nación y de sus regiones⁶, de la característica

5. Crecimiento pro-poor en Colombia: 1996-2004, Alfredo Sarmiento, Jorge Iván González, Carlos E Alonso, Roberto Angulo y Francisco Espinosa aplican el enfoque y la metodología de N. Kakwani para analizar si el crecimiento de Colombia en los últimos nuevos años ha favorecido a los pobres y mejorado la equidad.

6. Francisco Cortés de la Universidad de Antioquia viene adelantando una investigación de corte histórico que ayudará a dar cuenta de otras razones de la gran magnitud de la pobreza y la desigualdad en Colombia y en Antioquia. También los trabajos de José Antonio Ocampo para Colombia y de María Teresa Uribe para Antioquia ayudan a entender el carácter excluyente de las élites

de las élites que han detentado el poder político y económico, los que tienen que ver con los efectos de la violencia, el conflicto armado y las actividades del narcotráfico. De otra parte, con las políticas económicas y sociales aplicadas por los gobiernos en las últimas décadas. En este último sentido se han presentado contradicciones muy evidentes entre las políticas económicas y sociales aplicadas por los cuatro últimos gobiernos nacionales y los postulados y normas de la Constitución de 1991 a favor de la democracia participativa y de un Estado Social de Derecho. En resumen, las magnitudes de la pobreza, la intensificación de la misma, en particular en lo que tiene que ver con los ingresos, y las profundas desigualdades que registra el país, el departamento de Antioquia y Medellín tienen que ver con factores externos, pero igualmente con la mala conducción de las élites, con su insaciable deseo de acumulación y con los efectos del conflicto armado.

Algunas alternativas

Con base en nuestro análisis, la reducción de la pobreza, de la desigualdad y la promoción de la equidad social requerirían de acciones de corto, mediano y largo plazo y de cambios importantes en la forma como se viene asumiendo el desarrollo económico y social. Ciertamente, algunos asuntos no podrán ser cambiados o resueltos por el Estado colombiano o por los gobiernos locales, pues dependen de políticas, compromisos, dinámicas y/o imposiciones a nivel internacional, pero creemos que sí hay un margen de maniobra a utilizar, políticas que cambiar y/o ajustar y nuevos programas por desarrollar. Tratemos de avanzar en temas como los siguientes.

Buscar un crecimiento productivo y pro-poor

Según Bhagwati (1988) si una sociedad decide que la erradicación de la pobreza es un objetivo central, existen dos canales para lograrlo: El canal directo y el canal indirecto. El canal directo consiste en la provisión pública de satisfactores básicos como educación, vivienda, salud, requerimientos nutricionales y transferencias para financiar el consumo privado de estos y otros componentes del estándar de vida de los pobres. Se trata estrictamente del acceso a bienes y servicios (oferta pública o subsidios de alimentación, salud u otros bienes básicos). El canal indirecto consiste en el uso de recursos, la regulación, el diseño y la ejecución de las políticas y programas para acelerar el crecimiento y por esta vía aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los pobres. Algunos ejemplos son el microcrédito, la distribución de la tierra, el estímulo al empleo y las políticas de comercio exterior. La conclusión central de análisis de Bhagwati es la complementariedad de políticas, estrategias y mecanismos entre el crecimiento y la distribución del ingreso que impiden sostener la hipótesis de que el crecimiento y la pobreza son objetivos rivales (González y Sarmiento, 2005). Veamos primero los canales indirectos.

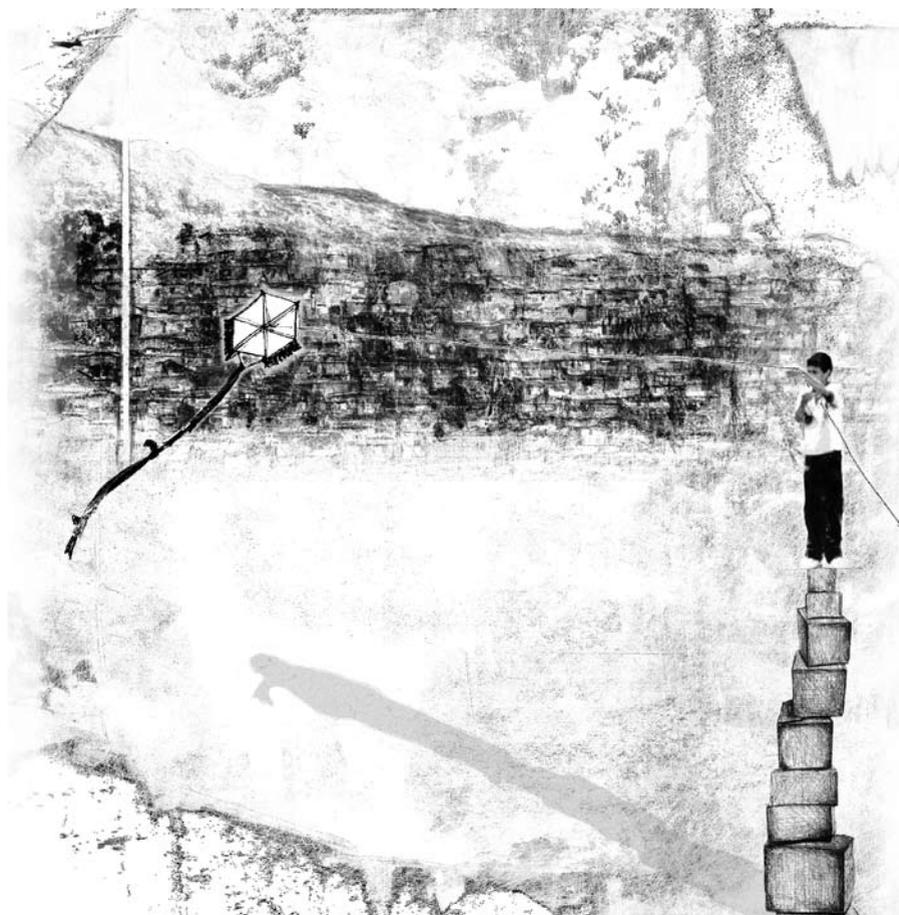
Antioquia y, Medellín en particular, se caracterizaron hasta los años 70 por ser una región donde el mayor valor agregado se generaba en la industria manufacturera. La existencia de este tipo de empresas posibilitaba la generación de un empleo más formal, mejor remunerado y con un poco más de estabilidad.

Hoy eso ha cambiado drásticamente y sigue cambiando a favor de las ac-

tividades de servicios, financieras y especulativas como ya lo anotamos. Las lógicas del mercado y los intereses de los grandes inversionistas vienen imponiendo estos cambios; sin dejar de lado estos intereses, es hora de dar una discusión a fondo en la ciudad y en el departamento en la que no sólo estén los grandes empresarios y sus intereses, sino que se escuche la voz de otros productores pequeños y medianos, de los trabajadores, del Estado y de los ciudadanos. Seguramente habrá que promover nuevos sectores productivos y adecuar, con mayor tecnología otros de los existentes buscando mayores niveles de productividad y eficiencia, pero partimos de la consideración de que la ciudad y el departamento aún tienen oportunidades en campos de la actividad productiva. El éxito de *Colombia Moda*, pone de presente que la industria de la confección y del diseño sigue teniendo oportunidades y se puede abrir a nuevos productores pequeños y medianos.

En el departamento se viene promoviendo la *Alianza por la equidad* y sectores importantes del empresariado están participando de ella. La pregunta en este caso es cómo ellos que tienen el capital, la tecnología, la información y las oportunidades contribuyen de verdad a reducir la pobreza, a mejorar la equidad y la justicia social. Cada vez hay más microempresarios y pequeños emprendimientos en la ciudad y en el departamento, la mayoría de estos esfuerzos están condenados al fracaso sino no cuentan con el apoyo de esos grandes empresarios y del Estado. Según la investigación que acaba de realizar Fundes Colombia, “nueve de cada diez pymes no logran consolidarse y fracasan”⁷. Sólo los

7. El Espectador, 4 al 10 de septiembre de 2005. p. 4b.



grandes empresarios y el Estado pueden crear las condiciones para que los miles de emprendimientos que se inician se vayan consolidando y sean de verdad una opción de ingresos para estas familias. Las grandes empresas son las que pueden abrirles oportunidades sostenidas de mercado (punto crítico de casi todos estos esfuerzos) y el Estado el que puede apoyarlos con créditos, asistencia técnica y capacitación.

De esta manera si esos empresarios quieren de verdad contribuir a la equidad en la región tienen que abrir esas oportunidades, promover procesos reales de encadenamiento y de apoyo a esos miles de pequeños productores, haciendo esto y generando nuevos empleos están hacien-

do lo que pueden y deben hacer. De igual manera, junto con el Estado deben promover el desarrollo regional, apoyando y generando otros centros de desarrollo subregional. Es posible que vean reducidas sus ganancias transitoriamente, pero la construcción de una sociedad más justa y equitativa exige un mayor aporte de quien lo puede hacer.

Ante el incremento del hambre, la desnutrición y la pobreza en las ciudades y en las propias zonas rurales, hay que promover masivamente la producción de alimentos, esto a más de aportar en el propósito de contar con una población mejor alimentada, más sana y productiva puede permitir exportar excedentes importantes. La industria de la leche, de los lácteos, de

la carne, a manera de ejemplo, puede expandirse mucho más, mejorar la seguridad alimentaria y generar empleo e ingresos que eviten que los campesinos y los pobres de los pueblos sigan emigrando hacia Medellín.

Siguiendo a Kakwani, a Bhagwati y a Stiglitz no se trata sólo de crecer, de bajar algo los elevados niveles de pobreza, sino de crecer y generar mayor equidad social, esto último demanda acciones de tipo redistributivo, de allí que se hable de procesos de reforma agraria, de promover la democratización de las grandes empresas, de adelantar políticas tributarias progresivas que graven las rentas ociosas, las grandes herencias, la especulación financiera y los grandes consumos.

Promoción de capacidades y derechos de ciudadanía

Las políticas promovidas en las últimas décadas en América Latina y en Colombia para reducir la pobreza consistieron básicamente en buscar el crecimiento económico y aumentar el capital humano, entendiendo por esto los mayores niveles de educación y de salud de la población. Nadie podría cuestionar la importancia y la utilidad de tener una población más educada y sana; desde Adam Smith se reconoció esta importancia y por eso él propuso la educación universal y gratuita, el asunto, es colocar en su justo lugar esta actividad y no limitarla a la educación básica.

Las coberturas educativas han crecido en casi todos los países de la

región, hoy se está cerca en casi todos ellos a la universalidad en la educación básica, lo que, sin lugar a dudas, se convierte en un progreso para la sociedad y en particular para esos jóvenes. Sin embargo, siguen registrándose graves problemas en términos de la calidad, de la pertinencia y de la universalidad en otros niveles. Los recientes estudios de ciudades y departamentos como Medellín y Antioquia pusieron de presente los bajos niveles de calidad en la educación impartida, las graves desigualdades en el acceso a la educación superior y la escasa pertinencia de la educación frente a los cambios y las demandas de la sociedad.

Respecto a la salud, se observan también aumentos en las coberturas, en particular en el llamado régimen subsidiado, pero a diferencia de la educación básica, se está aún muy lejos de la meta de la universalidad. Adicionalmente hay severas deficiencias en la calidad de los servicios prestados y en el acceso real a los mismos, producto del aumento de la pobreza por ingresos⁸.

En consecuencia hay que avanzar en la garantía real de los derechos de todos los ciudadanos a la educación y a la salud y, de manera particular a los jóvenes de los estratos bajos; sólo si ellos pueden acceder a una educación superior de calidad se puede esperar que mejoren sus ingresos y vayan superando la trampa de la pobreza. Es igualmente urgente ofrecer a estos jóvenes y a los adultos que lo requieran y lo deseen programas de formación y actualización en educación técnica y tecnológica.

Una generación libre y con derechos

Una propuesta que surgió en el marco de la Asamblea Constituyente de Antioquia y que consideramos estra-

tégica para romper el círculo de la pobreza y mejorar la equidad social es la que tiene que ver con la formación de una generación entre los cero y los 17 años que tenga asegurados sus derechos y pueda estar libre del hambre y la desnutrición, libre de la ignorancia, libre de enfermedades, libres de dependencia económica (no trabajo infantil), libre de violencia y exclusiones y libres para participar en los asuntos públicos.

Políticas afirmativas para grupos desaventajados

Al tiempo que se busca la universalidad en los derechos y que se desarrollan programas masivos como el que acabamos de reseñar, también es necesario promover programas a favor de grupos sociales especialmente afectados por la pobreza y por la exclusión. La población desplazada que carece de casi todos los derechos de ciudadanía; las mujeres pobres; la población negra (que representa el 28% de los habitantes de Medellín) y los niños trabajadores deben recibir el apoyo del Estado y de la sociedad para ver materializados sus derechos de ciudadanía.

Ampliación y fortalecimiento de la democracia y solución del conflicto armado

Amartya Sen ha insistido que la democracia es una condición y una garantía para enfrentar el hambre y la pobreza (1999), de hecho los países de más alto desarrollo humano y de menores niveles de pobreza y desigualdad son los países donde es más sólida y extendida la democracia (Noruega, Canadá, Suecia, Suiza). Por eso no basta con crecer más, con reducir los elevados niveles de pobreza y con ampliar servicios sociales, hay que avanzar en la construcción de sociedades con ciudadanos e instituciones realmente democráticas.

En el caso particular de Colombia y de Antioquia el conflicto armado y la guerra son obstáculos muy serios para mejorar los niveles de bienestar social y para ampliar la democracia, por ello esta es una tarea que tiene que seguir estando en nuestra agenda del desarrollo. ◉

Referencias

- Alcaldía de Medellín, (2004). Encuesta de calidad de vida. Secretaría de Planeación, Medellín.
- Bauman, Z. (1999). La globalización: Consecuencias humanas. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bauman, Z. (2000). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.
- Bernal, J y Álvarez, L (2005). Democracia y Ciudadanía. Medellín: Corporación Región.
- Bhagwati, J. (1988). Poverty and public policy World Development, Vol. 16, N° 5. Gran Bretaña
- Bolsa de Valores de Medellín, (2002). Emisores inscritos en el Rnvi. Medellín.
- Centro de Investigación para el Desarrollo —CID—. (2004). Bienestar: macroeconomía y pobreza. Bogotá: Universidad Nacional.
- Cepal. (2004). Balance Social de América Latina. Chile.
- Gobernación de Antioquia. (2005). Documento estratégico Alianza de Antioquia por la equidad. Medellín: Gobernación de Antioquia. Julio.
- López, H. (2005). Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Bogotá.
- Naciones Unidas. (2005). La situación social mundial. Nueva York.
- Naciones Unidas. (2000). Informe de Desarrollo Humano.
- Sarmiento, A. y González, J. (2005). Crecimiento pro-poor en Colombia: 1996-2004. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
- Sen, A. (1999). Desarrollo y libertad. Bogotá: Planeta.
- Stiglitz, J. (2003). El rumbo de las reformas: Hacia una nueva agenda para América Latina. Chile: Cepal.
- Uribe, M. (2005). Ponencia en el seminario de coyuntura social y laboral. ENS. Medellín.

8. Para hablar de lo que ocurre en Medellín, se observa que aunque la gente cubierta por el Sisbén podría usar los servicios de salud, muchos no lo hacen porque no disponen del dinero para transportarse y/o para cancelar el llamado copago. Algo similar ocurre con niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen los cinco mil pesos que se les pide mensualmente.